

Concepción, veintiuno de febrero de dos mil veinticinco.

**VISTO Y TENIENDO PRESENTE:**

**Primero:** Que en causa RIT 29-2024 de ingreso del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, tanto el Ministerio Público como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia, de 8 de enero de 2025, que absolvió al imputado Ricardo Yordan Seguel San Martín de la acusación por el delito de homicidio simple que el ente persecutor dirigiera en su contra y de la acusación particular por el delito de apremios ilegítimos calificados que el referido instituto sostuvo igualmente en su contra, en aquella parte que los condenó en costas, puesto que los sentenciadores del grado estimaron que no habían razones fundadas para eximir ni al Ministerio Público ni al Instituto Nacional de Derechos Humanos, del pago de las costas, imponiéndoseles estas en forma equitativa (motivo undécimo).

Argumenta el Ministerio Público que la sentencia sostiene que la Fiscalía y los querellantes carecían de motivos plausibles para litigar, en circunstancias que rindió abundante prueba para justificar la acusación interpuesta; afirmando que se ignoraron elementos de prueba ofrecidos en la acusación y medios de prueba rendidos en el juicio, a pesar de llevar cabo una investigación extensa que incluyó la muerte de Yordan Llempi Machacán, lesiones de Claudio Porma Leviqueo y otras lesiones, aunque posteriormente se separaron las investigaciones. Describe la prueba rendida en juicio.

Destaca que en marzo de 2024 se debatió el sobreseimiento definitivo, rechazando tal petición el tribunal, lo que fue confirmado por esta Corte; analizando las decisiones adoptadas por el tribunal y la Corte a lo largo del proceso.

Cita jurisprudencia.

De consiguiente, estima que durante la investigación y el juicio se presentaron pruebas suficientes que dan cuenta que existían razones válidas para litigar, a diferencia de lo que estima el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.

Pide que se enmiende la sentencia en alzada en aquella parte que lo condena en costas, eximiéndosele del pago de aquellas, por haber tenido motivo plausible para litigar, revocando en lo apelado dicho fallo.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXDMXSJZXY

Arguye, por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos que de conformidad a lo prevenido en el artículo 2 de la Ley 20.405, se dedica a la promoción y protección de los derechos humanos en Chile, permitiéndole el artículo 3 N°5 de dicha ley interponer acciones legales ante los tribunales de justicia y, debido a ello, presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Cañete el 25 de noviembre de 2021, por hechos ocurridos el 3 de noviembre de ese año, y solicitó diversas diligencias de investigación; participó activamente en la persecución penal, realizando y solicitando varias diligencias investigativas que constan en la carpeta de investigación y en el fallo recurrido. Destaca que se encuentra obligado tanto por la normativa interna como por el derecho internacional a instar investigar, perseguir y sancionar los delitos asociados a vulneraciones de derechos humanos.

Se refiere al delito imputado y a los antecedentes con que contaba para dirigir acusación particular en contra del imputado, Cita jurisprudencia.

De manera, dice, que yerran los sentenciadores al condenarlo en costas aduciendo que no había realizado actuaciones probatorias, pues tuvo una activa participación en la investigación de que se trata, teniendo motivo plausible para litigar.

Pide se revoque la resolución recurrida, enmendándola conforme a derecho, declarando en su lugar la exención del pago de costas judiciales, por considerar la existencia de razones plausibles para litigar en el proceso penal que nos ocupa.

**Segundo:** Que, de conformidad a lo expresamente dispuesto en el artículo 48 del Código Procesal Penal, *“Cuando el imputado fuere absuelto o sobreseído definitivamente, el ministerio público será condenado en costas, salvo que hubiere formulado la acusación en cumplimiento de la orden judicial a que se refiere el inciso segundo del artículo 462 o cuando el tribunal estime razonable eximirle por razones fundadas. En dicho evento será también condenado el querellante, salvo que el tribunal lo eximiere del pago, total o parcialmente, por razones fundadas que expresará determinadamente”*; y de acuerdo con el artículo 49, *“Cuando fueren varios los intervinientes condenados al pago de las costas, el tribunal fijará la parte o proporción que corresponderá soportar a cada uno de ellos”*.

De la normativa precedentemente transcrita queda en evidencia que, la regla general en materia de gastos que se generan en un proceso judicial



en que es absuelto el imputado, es que el ministerio público y el querellante deben ser condenados en costas; y sólo por razones fundadas puede el tribunal eximirles de dicha condena.

**Tercero:** Que, como cita el Ministerio Público en su recurso, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia de 9 de marzo de 2018, dictada en causa rol 533-2018, señaló que *“la valoración de la pertinencia de la formulación de reproche que hace el ente persecutor ha de efectuarse ex ante, es decir, considerando si era factible con aquellos antecedentes sustentar el requerimiento, acreditar el hecho ilícito y la participación del imputado”*.

Por otro lado, ciertamente cuando hay vulneraciones a los derechos humanos, lo que se espera de todos los órganos del Estado es que actúen con el mayor grado de diligencia, de tal manera que aquellas violaciones no queden impunes pues, sin lugar a duda, debe primar la verdad y la justicia.

**Cuarto:** Que, en el presente caso, el tribunal a quo atendida la decisión de absolución estaba facultado para imponer costas, sin necesidad de fundamentarlo, en cambio el a quo del caso, yendo más allá no sólo las fundamenta, sino que las justifica, considerando para ello que existían en el *subjudice* razones suficientes y evidentes; de este modo lo consigna en el considerando Undécimo que *“... el contenido de la propia investigación arroja indicios que desacreditaban la versión entregada por Claudio Porma Leviqueo y la familia de Yordan Llempi Machacán, en orden a cómo habrían ocurrido estos hechos; y que a pesar de aquello, se separó la investigación, dejando a cargo de otra el ataque que sufrió personal de Carabineros y la Armada, como si aquel no tuviera vinculación alguna con la actuación de los funcionarios de la Armada - y en particular del imputado Seguel San Martín -, decisión que redundó en una visión parcial y sesgada de los hechos, incompatible con el fundamento serio que exige la norma legal citada. En el caso de la acusadora particular, la omisión de ejercer la más mínima actuación probatoria en juicio, destinada a fundar su particular y mucho más gravosa calificación jurídica, descarta la existencia de una razón fundada para eximirle del pago de las costas”*.

**Quinto:** Que, en tales condiciones, sólo es posible concluir que ni el Ministerio Público ni el querellante particular, Instituto Nacional de Derechos Humanos, efectuaron el análisis de factibilidad necesario que les permitiera



ponderar la pertinencia de llevar a juicio oral a un imputado, acorde a las probanzas producidas y a la plausibilidad del acontecimiento de los hechos que produjeron la muerte de un ciudadano en las circunstancias que se pretendía, atento a los requisitos del reproche penal.

Así las cosas, la cantidad de prueba requerida, impetrada, obtenida o producida, carece de relevancia si ella no logra encaminarse a determinar que el imputado es el autor de una conducta típica, antijurídica y culpable como la que se perseguía atribuir por los apelantes y que claramente no consiguieron.

**Sexto:** Que, entonces, no le queda a esta Corte sino compartir la decisión del tribunal del grado que no logró encontrar fundamento para eximir a los apelantes de las costas sino sólo razones para condenarlos precisamente en ellas, lo que demuestra que no tuvieron motivo plausible para litigar en la forma que lo hicieron, teniendo en consideración, además, que ninguno de los apelantes interpuso recurso de nulidad de la sentencia de que se trata.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en los artículos 352, 360 y 370 del Código Procesal Penal, **SE CONFIRMA**, sin costas, la sentencia apelada de ocho de enero de dos mil veinticinco, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete en causa RIT 29-2024 de su ingreso, en la parte que condenó en costas al Ministerio Público y al querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Regístrese, comuníquese en la audiencia respectiva y devuélvase.

Redacción de la ministra interina Margarita Sanhueza Núñez.

No firma el ministro Fabio Jordán Díaz, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con permiso.

Rol 49-2025 y acumulada 59-2025 Penal.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XXDMXSJZXY

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Rafael Andrade D. y Ministra Suplente Margarita Elena Sanhueza N. Concepcion, veintiuno de febrero de dos mil veinticinco.

En Concepcion, a veintiuno de febrero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

